



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 05391-2006-PC/TC
LAMBAYEQUE
MANUEL SANTA MARÍA ESPINOZA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 6 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Santa María Espinoza contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 174, de fecha 23 de marzo de 2006, que declara improcedente la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 30 de noviembre de 2006, el recurrente interpone demanda de cumplimiento contra el Ministerio Público al haberse violado su derecho a la seguridad social, al no haberse cumplido con la actualización y nivelación de su pensión definitiva de cesantía contenidas en la Resolución 1135-2001-MP-FN-GECPER como pensionista del Decreto Ley N.º 20530, asimismo, solicita el pago de sus respectivos reintegros e intereses.

Con fecha 11 de julio de 2005, la Procuradora Pública del Ministerio Público contesta la demanda manifestando que la falta de recursos impide llevar a cabo la nivelación de pensiones. Sin embargo, el ministerio ha venido gestionando durante más de dos años a través de la Gerencia de Recursos Económicos la provisión de fondos ante la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, sin que hasta la fecha se haya obtenido una respuesta favorable del referido sector; agrega que dicha negativa trae como consecuencia que el Ministerio Público no pueda cumplir con sus obligaciones.

Con fecha 16 de junio de 2004, el Procurador Público a cargo de los asuntos del Ministerio de Economía y Finanzas propone las excepciones de falta de legitimidad para obrar del demandado y falta de agotamiento de la vías previas y, contestando la demanda, alega que no es el MEF quien tiene pagar la pensión nivelada y considera que es el Ministerio Público el responsable de pagar estas pensiones, por intermedio del titular del pliego.

El Séptimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 28 de febrero de 2005, declaró fundada la demanda, por considerar que el acto administrativo que se está demandando constituye



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

la Resolución de Gerencia N.º 1135-2001-MP-FN-GECPER, la cual ha pasado en autoridad de cosa decidida, en consecuencia no había que agotar ningún trámite administrativo previo, menos aún ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, si bien el recurrente no ha laborado en el MEF, el cumplimiento de esta resolución implica necesariamente la autorización de recursos que debe efectuar dicho Ministerio a favor del Ministerio Público; en consecuencia, dispone se ordene a la Fiscal de la Nación, titular del pliego del Ministerio Público, que cumpla con nivelar la pensión a la suma ascendente a S/. 5,025.89 reconocida en la resolución en mención; asimismo, se ordene el pago de los reintegros por los saldos no pagados e intereses legales.

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS

1. En la STC N.º 0168-2005-PC/TC, publicada en el diario oficial *El Peruano* el 29 de setiembre de 2005, este Colegiado ha precisado los requisitos mínimos comunes que debe tener el mandato contenido en una norma legal o en un acto administrativo para que sea exigible a través del proceso de cumplimiento. En el presente caso el mandato cuyo cumplimiento exige la parte demandante satisface dichos requisitos, de modo que cabe emitir un pronunciamiento de mérito.
2. En el presente caso, el recurrente solicita el cumplimiento de Resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 1135-2001-MP-FN, de fecha 21 de noviembre de 2001, a fin que se actualice y nivele su pensión definitiva de cesantía como pensionista del Decreto Ley N.º 20530.
3. Asimismo, se advierte de autos que la resolución que es objeto del petitorio se fundamenta en la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 430-2001-MP-FN de fecha 12 de junio de 2001, la cual dispone que se efectúe la nivelación de las pensiones de los magistrados y servidores cesantes del Ministerio Público, incluyendo como parte integrante de ellas el bono por función fiscal y la asignación por movilidad que reciben los magistrados en actividad.
4. El artículo 1º del Decreto de Urgencia N.º 038-2000, publicado el 7 de junio del 2000, aprobó el otorgamiento del Bono por Función Fiscal para los Fiscales del Ministerio Público que se encuentren en actividad. Asimismo, dispuso que dicho bono no tendrá carácter pensionable ni remunerativo, que no conformará la base para el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios y que será financiado con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios. Del mismo modo, mediante su artículo 3º se autorizó al Ministerio Público para que elabore y apruebe el Reglamento para el otorgamiento del Bono por Función Fiscal. De otro lado, por Decreto de Urgencia N.º 036-2001, publicado el 17 de marzo de 2001, se ampliaron los alcances del Bono por

**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

Función Fiscal a los funcionarios y servidores del Ministerio Público, hasta el límite de su presupuesto.

5. Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 193-2001-MP-FN, del 10 de abril de 2001, se aprobó la Escala de Asignaciones para el pago del Bono por Función Fiscal al personal fiscal y administrativo del Ministerio Público y el Reglamento para el otorgamiento del Bono por Función Fiscal al personal fiscal y administrativo del Ministerio Público. El artículo 1º del mencionado Reglamento dispone que éste será el único instrumento normativo de carácter institucional para la estricta aplicación del Bono por Función Fiscal, el mismo que no tendrá carácter pensionable y se otorgará al personal activo, con sujeción a las disposiciones legales que sobre esta materia se hallen vigentes. Asimismo, el artículo 5º del mencionado reglamento establece que el financiamiento del Bono por Función Fiscal será a través de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios del Ministerio Público.
6. Conforme a las normas citadas, el Bono por Función Fiscal no tiene carácter remunerativo ni pensionable y se financia a través de los recursos ordinarios del Ministerio Público. Por tanto, la Resolución de Gerencia N.º 1135-2001-MP-FN-GECPER, materia del presente proceso de cumplimiento, y la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 430-2001-MP-FN que la sustenta, fueron expedidas vulnerando las normas legales vigentes para el otorgamiento del Bono por Función Fiscal. Consecuentemente, el acto administrativo cuyo cumplimiento se exige carece de la virtualidad suficiente para constituirse en *mandamus* y, por ende, no puede ser exigible a través del presente proceso de cumplimiento, por no tener validez legal, al no haberse ceñido a las normas legales que regulan el Bono por Función Fiscal.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar **INFUNDADA** la demanda de cumplimiento de autos.

Publíquese y notifíquese.

SS.

**LANDA ARROYO
BEAUMONT CALLIRGOS
ETO CRUZ**

Lo que certifico:

Dr. Daniel Figallo Rivadeneira
SECRETARIO